

rezagada del Cauca en medio de las acciones de los grupos armados y la ineficiencia del Estado; la situación de los derechos humanos en la región de la costa Pacífica colombiana; la participación en la creación de garantías para liderar los derechos y la paz; las tensiones territoriales en la Región Caribe; el derecho ancestral étnico sobre la Isla Gorgona; y una crónica sobre el Tapón del Darién subtitulada “Los sueños migratorios y las sombras de la explotación”.

Y la cuarta sección, Los otros poderes del Estado, los derechos humanos y el cambio, está centrada en cuatro aspectos de ese tema crucial en el presente y el futuro de los derechos humanos en el país: Los desafíos y expectativas en torno a la gestión de la nueva Fiscal General de la Nación; el Balance de la gestión legislativa del Congreso de la República; una revisión sobre los actos adversos de la Cortes Constitucional y del Consejo de Estado ante las acciones de reforma y atención a las emergencias sociales, que van más allá de lo estrictamente jurídico y se han proyectado con evidente politización; el estado de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado; y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en tiempos del cambio.

De modo general, una primera conclusión del balance de este segundo año de Gobierno es el de la vigencia de una férrea oposición a sus políticas protectoras de los derechos humanos, por parte de un amplio sector dominante del establecimiento, que se resiste a renunciar a sus históricos privilegios, y procura la continuidad de la violencia como forma de mantener sus designios de acumulación económica y ejercicio autoritario y excluyente del poder político.

Lo cual se correlaciona con otro aspecto que resulta decisivo en el panorama del estado de dichos derechos: la situación nacional se hace más compleja e intrincada por efecto de las actuales dinámicas mundiales que determinan y se expresan directamente en el

país, especialmente en el curso de los conflictos armados y en los dilemas del desarrollo nacional, como podrá verse en lo contemplado en los ensayos sobre la paz, y sobre el cambio climático y los retos de la transición energética. Ello se suma a los nudos históricos de la dominación en el régimen político nacional, cuyos factores de combinación de violencia y desarrollo se han complementado con el conjunto de prejuicios del neoliberalismo que limitan el necesario intervencionismo del Estado, ahora imbricados con el despliegue político y cultural de la discriminación, el clasismo y el odio a la pobreza como dimensiones centrales de las resistencias al cambio.

Todo ello, como se podrá ver en estos ensayos, impone la continuidad de la incertidumbre en torno a lo anunciado en el epígrafe del anterior informe: “Noche y laberinto quizás estén hechos de la misma materia; en la noche veremos claro, y en el laberinto encontraremos la ruta”.

Quizás allí se encuentre el sentido profundo de este informe, revelador de esos problemas y obstáculos, pero optimista a pesar de todo, en tanto mantiene la esperanza como principio del cambio, dentro de los consistentes pasos que ha dado el país durante el segundo año de gobierno. Se trata de dos hechos históricos difícilmente controvertibles: primero, las agendas de las políticas públicas por primera vez están siendo impuestas en el debate político nacional en torno a los derechos humanos, e impulsadas por una izquierda en proceso de renovación lento pero evidente; y segundo, los profundos cambios sociales que se empezaron a expresar a partir del estallido social de hace algunos años, tales como los notables relevos generacionales en las élites políticas nacionales, y de modo especial en las de la izquierda y de los movimientos sociales; y los innegables avances nacionales en torno a la verdad de la enorme tragedia violatoria de los derechos humanos, acaecida en el país durante los años anteriores.

El editor



PREÁMBULO

UNA PAZ CADA VEZ MÁS ESQUIVA

Javier Giraldo Moreno, S.J.

En los largos períodos de violencia que hemos vivido en Colombia, la violación de los derechos humanos fundamentales ha tratado de imbricarse en los desarrollos del conflicto político armado. Particularmente las últimas cuatro décadas se han caracterizado por la sucesión de negociaciones y acuerdos de paz que no han aportado nada a la paz y que revelan al menos tres fallas protuberantes que bloquean cualquier logro de paz: 1. no tocar en absoluto las raíces de la violencia; 2. someter a los desmovilizados a persecución y exterminio; 3. reciclar rápidamente las modalidades del conflicto.

El actual gobierno del Pacto Histórico parece haber comprendido la inutilidad de los acuerdos de paz que colmaron los últimos cuarenta años, centrados en negociaciones que miraban a la entrega de armas de una u otra organización insurgente como forma de integrarse a una sociedad y Estado muchas veces más corruptos y violentos que los que habían inspirado su alzamiento en armas años o décadas atrás. Pero tal descubrimiento está también ligado a la transformación de muchas insurgencias modeladas por la base económica progresiva y avasallante del narcotráfico, el cual fue absorbiendo y sustituyendo los objetivos políticos. *Estas comprobaciones había que examinarlas también a la luz de algunos principios que inspiraban a sectores in-*

tegrantes del Pacto, el más importante de los cuales era la ilegitimidad e invalidez ética de enfrentar las violencias insurgentes con violencias supuestamente legales que trataban de aplastar las anteriores con despliegue de competencia en barbarie y crueldad. La duda sobre si era válido y efectivo apagar los incendios con gasolina rondaba en las conciencias de los políticos del Pacto que trataban de diseñar una alternativa a la búsqueda de la paz.

La propuesta de la Paz Total tuvo aciertos básicos, al comprender que el conflicto armado en las últimas décadas había ido trascendiendo la insurgencia política y tenía raíces en las estructuras económicas y políticas en que había degenerado el Estado. El llamado a mesas de diálogo en lugar de bombardeos y masacres, buscando acuerdos que abrieran salidas de consenso y tocaran la economía y la participación, produjo una primera reacción eufórica, la cual, sin embargo, destapó dimensiones imprevistas de difíciles abordajes; pero simultáneamente incentivó la oposición de las élites que han usufructuado ampliamente la corrupción y los esquemas de violencia estatal que habían consolidado durante su vigencia.

Para nadie es un secreto que en todo este contexto muchas formas de violencia han aumentado escandalosamente. El exterminio de líderes sociales de base se ha desbordado, mucho más cuando ha recurrido a cubrir-

